



Bogotá, D.C., veintiocho (28) de septiembre de dos mil veintidós (2022)

REFERENCIA

EXPEDIENTE No.: 11001-33-35-010-2022-00368-00
ACCIONANTE: JOSE DEL CARMEN FIGUEROA PEREZ.
ACCIONADAS: NACION – MINISTERIO DE DEFENSA - EJERCITO NACIONAL.
CLASE: ACCIÓN DE TUTELA.

Ingresa el expediente al Despacho con solicitud elevada por el accionante, para resolver lo que en derecho corresponda.

Se avizora que la parte accionante formuló una solicitud de **recurso de súplica** y del contenido de dicho documento se advierte que la misma contempla una **medida provisional** encaminada a que se proteja su derecho al trabajo, sin desarrollar o especificar concretamente la petición en tal sentido.

Conforme lo anterior, el juzgado debe señalar:

1. La Sala Plena de la Corte Constitucional en el Auto 312 de 2018 sintetizó tres exigencias básicas para que la adopción de medidas provisionales bien sea de oficio o a solicitud de parte, resulte procedente.

Dichos presupuestos son los siguientes:

- (i) Que la solicitud de protección constitucional contenida en la acción de tutela tenga vocación aparente de viabilidad por estar respaldada en fundamentos: (a) fácticos posibles y (b) jurídicos razonables, es decir, que exista la apariencia de un buen derecho (*fumus boni iuris*).
- (ii) (ii) Que exista un riesgo probable de que la protección del derecho invocado o la salvaguarda del interés público pueda verse afectado considerablemente por el tiempo transcurrido durante el trámite de revisión, esto es, que haya un peligro en la demora (*periculum in mora*).
- (iii) Que la medida provisional no genere un daño desproporcionado a quien afecta directamente.

2. En cuanto al primer presupuesto, la Corte Constitucional en el Auto 251 de 2020, lo definió “como un principio de veracidad en cuanto a la afectación del derecho o a la protección del interés público invocado como fundamento de la pretensión principal de la demanda de amparo”. Aunque la misma Corte reconoció que en la fase inicial del proceso no es posible arribar a un nivel total de certeza sobre la violación de los derechos fundamentales en controversia, sí es necesario un estándar de veracidad apenas mínimo.

Por tal razón, la solicitud de medida provisional “debe estar soportada en las circunstancias fácticas presentes en el expediente y en apreciaciones jurídicas razonables, sustentadas en la jurisprudencia de la Corte Constitucional”.

3. Por su parte, en el análisis del segundo requisito (*periculum in mora*) es necesario sopesar el riesgo de que, al no adoptarse la medida cautelar, ocasione un perjuicio o daño mayor del que se expone en la demanda que, de no precaverse, transforme en tardío el fallo definitivo. En palabras de la Corte, este requisito puede identificarse como “un temor fundado de que el derecho se frustre o sufra menoscabo durante la sustanciación del proceso”.

4. En la providencia en comento, la Corte precisó que el análisis de los dos presupuestos o requisitos debe ser conjunto. Precisamente, el segundo requisito



(periculum in mora) impide que el juez de tutela profiera una orden ante la simple apariencia de verdad (fumus bonis iuris) de la solicitud cautelar. Ello quiere decir que si no existe riesgo de que se ocasione un daño mayor al señalado en la demanda de tutela la medida debe ser denegada, aun cuando exista apariencia de buen derecho. En palabras de la Corte, “la medida provisional no es el escenario procesal para resolver el asunto de fondo, así se cuente con todos los elementos para tomar una decisión. El Artículo 7 del Decreto 2591 de 1991 solo se activa cuando, además de la apariencia de verdad, se requiera la intervención urgente del juez. A su vez, esto supone la amenaza de un perjuicio irremediable a un derecho fundamental o al interés público, que no podría ser corregido en la sentencia final.”

5. Por último, el tercer requisito incorpora el concepto de la proporcionalidad al análisis. La Corte indicó que “si bien en esta fase inicial no es dable desarrollar plenamente el juicio de proporcionalidad, sí es necesario ponderar entre los derechos que podrían verse afectados con la medida. La ponderación que esta etapa demanda funge como una última salvaguarda en favor del ciudadano. Evita que se tomen medidas que, aunque podrían estar justificadas legalmente, ocasionarían un perjuicio grave e irreparable. La proporcionalidad no supone un estándar universal y a priori de corrección, sino que exige una valoración que atienda las particularidades de cada caso concreto”.

6. Una vez leído el escrito de tutela de la referencia y analizado el material probatorio aportado al expediente, el Juzgado considera que no se reúnen las condiciones necesarias para acceder a la medida cautelar solicitada, sin que ello implique prejuzgamiento.

7. En cuanto a la apariencia de buen derecho, el Juzgado constata que el accionante dentro de su solicitud no propone de manera clara la medida provisional a la cual este Despacho deba pronunciarse. Si bien hace referencia a la protección de su derecho al trabajo, no expone los motivos que considera vulneran este derecho, en esa medida, el despacho debe atender los hechos inicialmente narrados en la acción de tutela, los cuales serán objeto de resolución en la sentencia que resuelva de fondo el asunto, si existe una vulneración al derecho de petición de la parte actora, a su derecho al trabajo y al debido procedimiento administrativo, solo por mencionar algunos temas que serán materia de análisis en la decisión de fondo, en caso de que la tutela cumpla los requisitos generales de procedibilidad.

Bajo el anterior criterio, el juzgado deberá resolver de manera desfavorable la medida provisional elevada por el accionante, toda vez que no se encuentra de manera concreta en qué sentido deba pronunciarse el Despacho.

En mérito de lo anterior, el juzgado Décimo Administrativo del Circuito de Oralidad de Bogotá,

RESUELVE

PRIMERO: NEGAR la medida provisional solicitada en el líbelo.

SEGUNDO: EN FIRME la presente providencia, ingrese el expediente al Despacho para adoptar la decisión que en derecho corresponda.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

AUGUSTO LLANOS RUIZ
JUEZ

Firmado Por:
Augusto Llanos Ruiz
Juez Circuito
Juzgado Administrativo
010
Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **a62a953cc5cf831d84be799bfe213c41637c8386ae8867cc7a5339ca152538b8**

Documento generado en 28/09/2022 10:46:16 AM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>